



CONFORME CON SU ORIGINAL

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS RESPECTO DEL REPARO FORMULADO POR EL COMITÉ DE AUDITORÍA PARLAMENTARIA AL COMITÉ PARLAMENTARIO UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE Y AL DIPUTADO SEÑOR GASTÓN VON MÜHLENBROCK POR LA CONTRATACIÓN DE UN ASESOR EN FORMA SIMULTÁNEA PARA EL COMITÉ PARLAMENTARIO Y PARA EL REFERIDO DIPUTADO.

VALPARAÍSO, 12 de junio de 2019.

VISTOS:

1. Oficio reservado N° 182, del 8 de marzo de 2019, mediante el cual el Comité de Auditoría Parlamentaria comunica a la Comisión de Ética y Transparencia reparo formulado y no resuelto por el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock y el Comité Parlamentario Unión Demócrata Independiente.
2. Que, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 366 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dio traslado al Jefe de Bancada del Comité Parlamentario UDI y al diputado señor Von Mühlenbrock para que aclaren las cuestiones planteadas en el reparo antes señalado.
3. Respuesta del diputado señor Gastón Von Mühlenbrock y del diputado señor Javier Macaya, Jefe de Bancada del Partido UDI, recepcionada con fecha 19 de marzo de 2019.
4. Oficio N° 57 del 15 de abril de 2019, mediante el cual el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, resuelve la consulta que esta Comisión le enviará mediante oficios N° 22 y 25 respectivamente.
5. Comunicación del Secretario General de la Cámara de Diputados, señor Miguel Landeros, del 16 de abril de 2019, mediante la cual da respuesta a la consulta que esta Comisión le enviará mediante oficios N° 20 y 24.

CONSIDERANDO:

1. Que el Comité de Auditoría Parlamentaria funda su reparo señalando que se verificó la existencia de dos contratos a honorarios respecto de don Pablo Cantellano Ampuero, uno para prestar servicios de asesoría jurídica al Comité





Parlamentario UDI, a partir del 11 de marzo de 2018, y un segundo contrato para prestar asesoría jurídica y legislativa al diputado señor Gastón Von Mühlenbrock, a partir del 1 de junio de 2018.

Que la Resolución N° 3, de junio de 2018, del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, establece las restricciones y/o prohibiciones a las que se sujeta el uso de asignaciones parlamentarias, señalando que "se prohíbe que una misma persona, ya sea en su calidad de persona natural o formando parte de una sociedad, preste servicios conjuntamente a un Diputado y un Comité Parlamentario". A su vez, el Comité indica que el oficio N° 62 de 2018, del Consejo, precisa que "dicha prohibición aplicará solo en el caso de que se trate del Comité del que forma parte el parlamentario respectivo".

Agrega el Comité de Auditoría que si bien la Resolución N° 3 entró en vigencia el 1 de julio de 2018, se estableció un plazo de transición, hasta el 31 de agosto de 2018, para adecuar a las nuevas exigencias los contratos suscritos con anterioridad. Por lo tanto, a partir de esa fecha existiría un incumplimiento que fundamenta el reparo observado, el cual asciende al monto de \$3.822.222 que corresponden a la remuneración del señor Cantellano, financiado con cargo a la asignación de personal de apoyo del Comité Parlamentario y del diputado, en el mes de septiembre de 2018.

2. Por su parte, los diputados señores Javier Macaya y Gastón Von Mühlenbrock indicaron, como cuestión previa al fondo del reparo, que a la fecha el profesional señor Cantellano ya no presta servicios de asesoría al diputado, por lo que la situación fáctica que dio origen a la observación del Comité de Auditoría ya se encuentra resuelta.

No obstante, aclararon que no cuestionan la labor del Comité de Auditoría Parlamentaria, aunque expresaron que sería deseable contar con una mejor difusión de los contenidos de los oficios y documentos emanados de estos organismos. Explicaron, que la contratación en cuestión estuvo sustentada en la buena fe, en tanto cumplió con todas las exigencias y filtros institucionales al momento de firmar los contratos.



Respecto del deber de adecuación aludido por el Comité de Auditoría, se indicó que resulta necesario atenerse a las normas y garantías constitucionales y legales que regulan la libertad de trabajo, y en virtud de las cuales toda restricción debe estar amparada en una norma de rango legal.

3. Que como medida para mejor resolver, la Comisión acordó consultar tanto al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias como al Secretario General de la Cámara de Diputados, sobre cómo debía interpretarse la obligación de adecuar los contratos suscritos con anterioridad a la Resolución N° 3 de 2018.
4. Que frente a la consulta de la Comisión, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias señaló que la referida Resolución N° 3 de 2018 regula el uso de los recursos para el cumplimiento de la función parlamentaria, normativa que fue ampliamente difundida en ambas Cámaras y dentro de la cual se prevé la prohibición objeto del presente reparo.

Explica el Consejo, que tomando en consideración la naturaleza de orden público de estas normas de legalidad y probidad del gasto, se estableció un plazo de vacancia para adecuar los contratos suscritos con anterioridad a las nuevas exigencias. A juicio del Consejo, "desde esa fecha, las resoluciones del Consejo se hicieron plenamente exigibles, sin que pudiera esgrimirse un criterio de temporalidad para afectar su fuerza vinculante". Por tanto, concluye el Consejo que es imperativo, tanto para la Corporación como para los parlamentarios, ajustarse a esta normativa.

5. Por su parte, el Secretario General de la Cámara de Diputados, señor Miguel Landeros, informó que la prohibición decretada por el Consejo Resolutivo de contratar simultáneamente a una persona por un diputado y por el Comité al que este pertenece, "es una norma de inhabilidad válida para las contrataciones que se produzcan después del 29 de junio de 2018", dado que dicha causalidad de inhabilidad sobreviniente "no puede afectar a los contratos válidamente suscritos por esta Cámara de Diputados con anterioridad a esa fecha, contratos que no pueden modificarse sin el consentimiento de ambas partes".



El Secretario General precisó que dentro de las causales previstas para el término del contrato de honorarios que regula el Reglamento del artículo 3° A de la ley N° 18.918, no se contemplan las inhabilidades sobrevinientes que pueda establecer el Consejo y que éste no posee competencia para modificar la legislación vigente. Es por ello que estimó que no corresponde en este supuesto dar término unilateral a estos contratos.

6. Que de los antecedentes antes señalados, se deduce que la única forma de dar cumplimiento al deber de adecuar los contratos suscritos con anterioridad a la Resolución N° 3 de 2018, a las nuevas exigencias que dicho instrumento establece, habría sido dar término al contrato de honorarios del asesor en cuestión, ya sea con el Comité Parlamentario o con el respectivo diputado que forma parte de dicho Comité.

Que en este caso, para efectos de dar término a la prestación de servicios, es necesario atenerse a lo dispuesto en el Reglamento del artículo 3° A de la ley orgánica del Congreso Nacional. La norma antes referida regula la terminación del contrato a honorarios en el artículo 29, señalando que: "Los contratos a honorarios terminan por petición expresa del comité o parlamentario para quien prestaba sus servicios el trabajador independiente y siempre que se cumpla cualquiera de las siguientes causales: a) Cumplimiento del plazo establecido en el contrato a honorarios; b) Cumplimiento del cometido o trabajo específico para el que fue contratado; c) Mutuo acuerdo de las partes; d) Decisión unilateral del prestador de servicios, según términos del contrato; e) Decisión unilateral del comité o parlamentario fundada en la pérdida de confianza hacia el prestador del servicio u otra causal que permita el término anticipado; y f) Por cesación en el cargo del parlamentario que solicitó la contratación de los servicios o disolución del comité que contrató sus servicios, casual que deberá consignarse expresamente en el contrato a honorarios que se celebre".

Que ninguna de las hipótesis antes señaladas se da en el supuesto de un asesor que presta servicios tanto a un diputado como al Comité Parlamentario al que éste



pertenece y a cuyos contratos se dio curso en tanto cumplieran con toda la normativa vigente al momento de suscribirlos.

Por lo tanto, obligar al término unilateral de estos contratos, sin mediar alguna de las causales antes señaladas, vulneraría el artículo 19 N° 16 de la Constitución que asegura a todas las personas la libertad de trabajo y su protección.

7. Que a similar conclusión arriba el informe en derecho encargado por la Comisión de Régimen Interno y Administración mediante el oficio N°45, de mayo de 2019, sobre el alcance de las atribuciones del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, del Comité de Auditoría Parlamentaria y de la Comisión de Régimen Interno y Administración; y sobre la coherencia y concordancia de las normas dictadas por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias en relación con otras normas reglamentarias y legales vigentes.

En particular, el informe antes referido elaborado por la Secretaría de la Corporación, constata que no se logra determinar con claridad el fundamento que tuvo a la vista el Consejo para adoptar la decisión de prohibir prestar servicios de manera simultánea a un diputado y un Comité Parlamentario.

Se enfatiza además que en caso de un vínculo mediante contrato de trabajo, la garantía constitucional de libertad de trabajo y prohibición de discriminación en el mismo está reafirmada en el Código del Trabajo (artículo 2 incisos tercero, cuarto y quinto); sentencias del Tribunal Constitucional (sentencia Rol N° 804, considerando decimoprimer); dictámenes de la Dirección del Trabajo (dictamen N°1279/19); doctrina de derecho laboral (Luz Bulnes Aldunate, *La libertad de trabajo y su protección en la Constitución de 1980*, Revista de Derecho Público, N° 28, 2016, págs. 207-224; y Sergio Gamonal Contreras, *El principio de protección del trabajador en la Constitución chilena*, Estudios constitucionales, Vol.11, N° 1, Santiago, 2013); y sentencias de los tribunales superiores de justicia (Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 1234-2013, 6 de enero de 2014).



8. Adicionalmente, la Comisión hace notar que tratándose de contratos de trabajo la prohibición resulta difícil de conciliar con la norma del artículo 17 del Reglamento del artículo 3° A de la ley orgánica del Congreso Nacional, que establece que "Dos diputados podrán solicitar la contratación de una misma persona que le prestará servicios a ambos simultáneamente dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Si por la naturaleza de los servicios contratados, no es posible prestarlos de manera simultánea, dos diputados podrán solicitar la contratación de una misma persona que realice jornadas a tiempo parcial, debiendo en el contrato de trabajo señalarse específicamente la jornada que se cumplirá por parte del trabajador para cada uno de ellos."

Si la norma antes citada permite expresamente la prestación de servicios, mediante contrato de trabajo, para dos diputados simultáneamente, con mayor razón resulta admisible tratándose de un contrato de honorarios, en cuyo caso no existe limitación alguna para prestar servicios a varios diputados.

9. Por último, esta Comisión destaca que la situación que dio origen al reparo formulado por el Comité de Auditoría ya fue subsanada de oficio por las partes, en tanto el señor Cantellano ya no presta servicios al diputado señor Von Mühlenbrock, prestando servicios solo para el Comité Parlamentario.

SE RESUELVE:

Rechazar el reparo formulado por el Comité de Auditoría Parlamentaria al Comité Parlamentario Partido Unión Demócrata Independiente y al diputado señor Gastón Von Mühlenbrock, en relación con la contratación del señor Pablo Cantellano Ampuero para prestar servicios de asesoría jurídica al Comité Parlamentario y simultáneamente al diputado.

...



Resolución adoptada con el voto unánime de los diputados presentes, señora Karin Luck y de diputados señores Jaime Bellolio, Bernardo Berger, Juan Luis Castro, José Pérez Arriagada, Leonidas Romero, Guillermo Teillier y Víctor Torres; dándose cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 367 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Acuerdo adoptado en sesiones de fechas 13 y 20 de marzo, 17 de abril y 12 de junio de 2019, con la asistencia de las diputadas María José Hoffmann y Karin Luck; y de los diputados señores Jaime Bellolio, Bernardo Berger, Juan Luis Castro, Giorgio Jackson, Javier Macaya, José Pérez Arriagada, Leonidas Romero, René Saffirio, Guillermo Teillier y Víctor Torres.

Notifíquese por el señor Secretario de la Comisión, dese cuenta y archívese.



Bernardo Berger Fett
Presidente de la Comisión



Juan Pablo Galleguillos
Secretario(s) de la Comisión



Leonidas Romero
[Signature]

CONFORME CON SU ORIGINAL